

XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, 2009.

# Los movimientos sociales en Uruguay. Presente y perspectivas.

Carlos Moreira.

Cita:

Carlos Moreira (2009). *Los movimientos sociales en Uruguay. Presente y perspectivas*. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-062/1650>

*Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.*

# Los movimientos sociales en Uruguay

## Presente y perspectivas

**CARLOS MOREIRA**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS, ARGENTINA

### I.- Introducción

Desde los últimos meses de la dictadura hasta nuestros días, el desarrollo de los movimientos sociales en Uruguay atravesó tres etapas. En la primera, que se extendió desde los últimos meses de 1984 hasta comienzos de los años noventa, los movimientos sociales vivieron el auge propio de la recuperación del régimen democrático luego de años de represión dictatorial. En la segunda, los movimientos sociales después de la victoria en el plebiscito de 1992 que impidió las privatizaciones de las empresas públicas, paradójicamente entraron en un largo letargo, al mismo tiempo que la ofensiva neoliberal se manifestaba en otros campos de la acción estatal con las denominadas *tercerizaciones* impulsadas por el gobierno de Luis Alberto Lacalle. La tercera, iniciada entre 2002 y 2005 transcurre actualmente y en ella ha habido un nuevo impulso de la actividad los movimientos sociales. Veamos con detalle cada una de estas etapas.

En 1984 la transición a la democracia fue impulsada por un heterogéneo bloque opositor a la dictadura donde convergieron partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales. Entre estos movimientos sociales se encontraban los de más importancia en aquel momento, esto es, la flamante central obrera PIT-CNT que articuló la tradición de los años sesenta con la nueva generación de sindicalistas, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas de Ayuda Mutua

(FUCVAM) fundada en 1970, y los movimientos de derechos humanos entre los que se encontraba el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) fundado en 1981. Junto a ellos, compartieron el espacio público otros actores sociales de reciente creación, como los que se movilaron tras la demanda de solución a la crisis de vivienda, a través de tomas de tierra y el establecimiento de asentamientos irregulares.

En esta primera fase, los movimientos sociales se unificaron en torno al reclamo de verdad y justicia sobre el tema de los desaparecidos. Esto implicó un rechazo a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado promulgada en diciembre de 1986 durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990), que significaba suspender definitivamente toda posibilidad de juzgar a los culpables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Los movimientos sociales impulsaron la derogación de la Ley de Caducidad, pero el triunfo de la opción oficialista en el plebiscito de abril de 1989, sumado a que los partidos políticos ya reorganizados volvieron a ocupar paulatinamente el centro de la escena pública, marcó el inicio de una fase declinante en el papel y el accionar de los mismos.

En los años noventa, tanto FUCVAM como SERPAJ y demás organizaciones de derechos humanos trataron sin éxito que los sucesivos gobiernos de Lacalle (1990-1995), Sanguinetti (1995-2000) y Jorge Batlle (2000-2005) cumplieran con el artículo 4° de la Ley de Caducidad que preveía la investigación de los hechos de desaparición de personas. Al mismo tiempo, enmarcaron su estrategia subordinándose a la del FA en su largo trayecto hacia el poder. De esta manera, el bloque democrático opositor a la dictadura, que integraban todos los partidos políticos y movimientos sociales, con el gobierno de los partidos tradicionales Colorado y Blanco se transformó en un bloque progresista opositor al neoliberalismo.

A partir de la crisis del año 2002, los movimientos sociales conocieron un nuevo auge, y con la llegada al gobierno del FA, esta revitalización se desarrolló en un escenario de crisis de su alianza con la coalición de izquierda.

La división del bloque progresista entre oficialistas y opositores es uno de los fenómenos que caracteriza la gestión actual del gobierno del FA.

Los oficialistas consideran que el gobierno frenteamplista ha realizado las cosas dentro del límite de lo posible, que los problemas fueron enfrentados con las máximas capacidades disponibles, y que si bien es necesario profundizar o acelerar el paso, en el rumbo general de las políticas no es necesario introducir ningún cambio sustancial.

Los segundos, por su parte, critican el gradualismo de la gestión frenteamplista considerándola una traición a las máximas programáticas que señalan la necesidad de impulsar desde un gobierno de izquierda medidas de cambio radical.

Mientras el gobierno considera adecuado su modelo de desarrollo basado en una coyuntura favorable de precios para los productos agro exportables, la oposición progresista, aunque existen muchas diferencias de globalidad y énfasis que veremos mas adelante, considera que este modelo significa consolidar la dependencia del Uruguay respecto a los países desarrollados, y que en realidad el gobierno frenteamplista está continuando la línea de acción de sus predecesores, los partidos tradicionales.

En síntesis, el oficialismo se considera representante de una línea moderna de la izquierda, emparentada con la socialdemocracia y la tercera vía europea, mientras que en la vereda de enfrente, los actores se reivindican representantes de la izquierda tradicional o de una nueva izquierda radical, y denuncian al gobierno por neoliberal.

Sobre la evolución de esta división entre oficialistas y opositores también existen perspectivas divergentes. Desde el gobierno se ve a la política en Uruguay como una política de bloques, por un lado el bloque progresista (integrado como en los noventa por el FA, el PIT CNT y los movimientos sociales) y por otro lado el bloque conservador (integrado por partidos tradicionales y las cámaras empresariales) y se cree que a medida que se acerque el momento electoral las diferencias al interior del bloque progresista se minimizarán frente a las que se tienen en la competencia con el bloque conservador.

Por su parte, la oposición radical sostiene que en la medida que el gobierno no cambie el rumbo, se irá generando una escisión permanente de sus fuerzas políticas y sociales y el FA perderá su carácter de coalición unitaria de la izquierda uruguaya (algo de ello ha comenzado a ocurrir con el retiro del 26 de Marzo, grupo fundador del FA, a comienzos de 2008).

Esta caracterización del bloque progresista que accedió al gobierno con el triunfo electoral del 2005 y su paulatina escisión en oficialistas y opositores, ha tenido dos grandes consecuencias para los movimientos sociales. En primer lugar, la fractura interna del FA, se trasladó a los movimientos que integran el bloque progresista. Por ejemplo, el debate entre oficialistas y opositores atravesó gran parte de la actividad del PIT CNT, que como tal ha decidido mantener un apoyo crítico al gobierno, como mejor manera de sintetizar las correlaciones de fuerzas internas levemente superiores del oficialismo.

Otros movimientos han ido ubicándose en uno u otro campo, con mayor o menor nitidez en las definiciones, permaneciendo muchos de ellos en la inasible frontera de las posiciones intermedias. Claramente en la medida que la tradición de lucha en común dentro del bloque democrático primero y progresista sobreviva y mantenga su peso, la lógica de la confrontación interna será subordinada a la lucha frente al bloque conservador, y las posibilidades para una fuga

hacia la izquierda de grupos políticos y movimientos sociales opositores se verán seriamente afectadas.

## **II.- Sujetos en conflicto**

Transcurrida ya la casi totalidad del período de gobierno del FA, es posible identificar, entonces, tres tipos de escenarios en el mapa de los movimientos sociales en el Uruguay actual, cada uno con sus actores y conflictos específicos.

Desde su origen, el FA fue una fuerza política que albergó dos tendencias, una moderada y otra radical: la primera, formada por socialistas y democratacristianos que hizo énfasis en la conciliación de clases, y la segunda, integrada por comunistas y figuras de los partidos tradicionales, que tuvo un fuerte carácter contestatario. Aunque en 1971 la presencia de tendencias moderadas y radicales se reflejó en un programa construido como un mosaico heterogéneo, con diversas fuentes inspiradoras y una composición social policlasista, en la práctica y en el discurso frenteamplista de los orígenes se destacó siempre la unidad y el consenso en la toma de decisiones como uno de los valores supremos. En esos momentos, cierta predominancia de las figuras radicales provocó que su discurso tuviera un fuerte acento clasista y que se desarrollaran alianzas profundas con el movimiento obrero y estudiantil de la época.

A partir del denominado proceso de actualización ideológica iniciado a mediados de los noventa, el Frente Amplio pasó a considerarse una coalición progresista y con perfil moderado. La coalición se mantuvo unida con el objetivo de ganar las elecciones nacionales de octubre de 2004, como ahora las de octubre de 2009, aunque ya se haya producido una pequeña escisión con el mencionado alejamiento del grupo radical el 26 de Marzo.

El 26 de Marzo abandonó el frente Amplio a comienzos de 2008 y si bien no logró arrastrar tras de sí a ninguna figura parlamentaria del Frente Amplio, transformó un agrupamiento preexistente (la Asamblea Popular nacido en abril de 2006 como conglomerado de veinte partidos y organizaciones políticas, sociales, sindicales y estudiantiles) en un partido político que se presenta a sí mismo como una oposición de izquierda al carácter centrista del gobierno de Vázquez.

El papel dominante en este colectivo de organizaciones lo tuvieron el 26 de Marzo y la Corriente de Izquierda. Cuando el 26 de Marzo rompió formalmente los lazos que lo unían al FA y propuso a sus aliados que la Asamblea Popular se transformara en un nuevo partido político con el objetivo de lograr lugares en el Parlamento en las elecciones nacionales de octubre de 2009. La Corriente de Izquierda, luego de una reñida votación interna decidió no abandonar el FA, lo que determinó que un numeroso grupo de dirigentes y militantes en abierto desacuerdo con la decisión

adoptada pasaran a integrarse a la Asamblea Popular. Hoy la Asamblea Popular se encuentra en plena campaña electoral a la par que los otros partidos, aunque las encuestas marcan que su caudal electoral es todavía poco significativo ([www.infolatam.com](http://www.infolatam.com), 19-02-2009).

Por otra parte, también han aparecido otros dos partidos radicales de izquierda que competirán en octubre de 2009 por el mismo lectorado, esto es, la izquierda descontenta con el Frente Amplio. Ellos son el Partido Bolchevique del Uruguay y el partido COMUNA.

Desde el punto de vista ideológico, estos tres nuevos partidos se ubican claramente dentro de la ortodoxia marxista de la izquierda uruguaya, se definen como anticapitalistas, resisten al neoliberalismo y su objetivo es el socialismo a la manera de Marx, Engels y el marxismo clásico.

Es el momento de considerar otro actor importante en el esquema de los movimientos sociales. Nos referimos a las organizaciones de vecinos que se ubican en el ámbito urbano barrial.

Durante los últimos años, los movimientos de vecinos organizados han navegado en el término medio entre las ventanas de oportunidades que la crisis de los partidos y el Estado les abre, y los obstáculos y condicionamientos que la misma les plantea. En esta situación encontramos una serie de movimientos autónomos de los partidos políticos y con una importante experiencia de autogestión, vinculados a asuntos locales y medio ambientales, tanto en el medio urbano como rural.

Sabido es que en Uruguay, a pesar de existir un importante presencia de la ciudadanía en organizaciones de la sociedad civil, son casi inexistentes las instancias de participación en las políticas públicas estatales, así como en el control y la rendición de cuentas de las instancias gubernamentales.

En estos casos, la crítica que los movimientos de vecinos organizados hacen al accionar del Estado y el gobierno no significa que tengan un modelo alternativo de políticas, sino que se concentra en un paso previo: luchar por la construcción de espacios para la participación articulada en la gestión pública con los actores estatales.

El surgimiento de estos nuevos sujetos sociales ha estado relacionado en gran medida con la problemática de la retirada estatal de los procesos de protección social y el aumento de la pobreza y la marginalidad que se ha originado con la implementación del modelo económico neoliberal. Y por tanto sus militantes de base se reclutan en los barrios de la periferia montevideana y ciudades del interior, entre las personas que han caído por debajo de la línea de pobreza fundamentalmente por una insuficiencia en el ingreso monetario. Dado que su emergencia, entonces, está más asociada al fenómeno coyuntural del desempleo, los vecinos organizados constituyen un grupo heterogéneo con altos niveles de movilidad e incertidumbre, cuya situación depende de los cambios en el ingreso, especialmente el salario.

Uno de los grupos más importantes y activos de vecinos organizados lo constituye la Red Intersocial Oeste que actúa en la zona del Cerro, uno de los tradicionales barrios obreros de Montevideo, hoy convertido en un cementerio de frigoríficos, fábricas y reservorio de desempleados. La trayectoria de este movimiento de vecinos preocupados por asuntos locales tiene una década. Nacieron en 1998 en oposición al proyecto de la Secta Moon de instalar un puerto en las costas del barrio que dan al Río de la Plata, y llega hasta hoy cuando agrupa a diferentes organizaciones sociales como desocupados, ocupantes de tierras, vecinos contra las drogas, entre otros. El núcleo básico sigue siendo un grupo de vecinos que tienen como base ideológica declarada la oposición a los modelos de desarrollo capitalista salvaje, y que en 2005 cuando el FA ascendió al gobierno se radicalizó como respuesta a lo que tempranamente visualizaron como una derechización del gobierno.

En los comienzos, además de la oposición al proyecto de la Secta Moon, los vecinos se organizaron para atender demandas concretas y urgentes de los pobladores. En ese sentido, podríamos definirlos como una organización de autodefensa social, y en la búsqueda de satisfacer esas demandas comenzaron a presionar sobre los poderes públicos, como la Policía y la Intendencia de Montevideo. Luego de esa etapa inicial se pasó a otra, donde el carácter reactivo se complementó con propuestas en el plano de las metodologías participativas para las políticas públicas locales. Actualmente, como ejemplo de propuestas activas, estos movimientos de vecinos propusieron al Estado una elaboración conjunta de un proyecto a desarrollar en el predio del ex Frigorífico Nacional. En esta evolución comenzaron a trascender los límites del Cerro, para pasar al resto de la ciudad, e incluso el país, organizando encuentros con organizaciones similares en los departamentos de Artigas y Tacuarembó.

Hoy el movimiento se encuentra en plena expansión, pero la crisis del modelo estatal desarrollista, así como la adopción de estrategias continuistas de las soluciones pro mercado por parte del gobierno frenteamplistas, condiciona esta evolución, pues los margina de los escenarios de elaboración de las políticas públicas.

Finalmente, hay que decir que a nadie escapa que en Latinoamérica algunos gobiernos han perdido el control de sus economías, y los bancos y empresas transnacionales parecen haber encontrado la fórmula mágica de obtener beneficios: “capitalismo sin trabajo, más capitalismo sin impuestos” como afirma Beck.

Un caso paradigmático lo constituye la instalación de plantas de celulosa en el Uruguay. Con el objetivo de atraer inversiones extranjeras, se formalizan acuerdos que otorgan ventajas impositivas a las empresas y que les permiten, por ejemplo, dar por finalizado el contrato e iniciar acciones legales contra el Estado por los motivos más inverosímiles que entorpezcan el

funcionamiento productivo. En el caso de las multinacionales dedicadas a la producción de celulosa, el papel de oposición quedó en manos de los grupos ambientalistas nacionales.

La historia reciente del movimiento ambientalista presenta tres etapas claramente diferenciadas. En la primera, de los orígenes a mediados de los años ochenta, el ambientalismo nació como movimiento de autodefensa, basado en una visión conservacionista que se opuso a la construcción del Canal Andreoni y su impacto en los bañados de Rocha. En esta etapa fundacional los grupos ambientalistas se nuclearon en la organización de segundo grado Red de Organizaciones No Gubernamentales (Red ONGs) y concurren masivamente a la Cumbre de Río en el año 2000. Los hitos más importantes de esta etapa fueron la formación en 1996 del Grupo Movimiento por la Vida, el Trabajo, y el Desarrollo Sustentable (MOVITDES) de la localidad de Fray Bentos que logró frenar la instalación de la planta de celulosa Transpapel, y la activa movilización de los vecinos de Sayago para impedir la instalación de una planta de *pórtland* en ese barrio de Montevideo.

La segunda etapa dio comienzo al regreso de la citada Cumbre de Río, cuando un grupo de ambientalistas se orientó hacia la incorporación de perspectivas políticas y económicas sobre los modelos de desarrollo y se relacionó con el movimiento ambiental regional internacional, logrando la creación del movimiento Eco Tacuarembó que se opuso con éxito a la instalación de una central nuclear en la localidad de Paso de los Toros. Como consecuencia de esta nueva estrategia, la Red ONGs se dividió en dos sectores, uno tradicional que continuó aferrado a las banderas conservacionistas y uno renovador que incorporó los planteamientos políticos. Este último grupo fue liderado por Redes Amigos de la Tierra y la naciente Organización Guazubirá, e integrado además por Eco Tacuarembó y MOTVIDES, comenzando en conjunto una batalla contra el modelo forestal impulsado por los gobiernos de los partidos tradicionales y actualmente por el gobierno frenteamplista. Esta etapa centrada en la oposición al modelo forestal fue nucleando nuevos aliados como los productores y vecinos de Libertad, en el departamento de San José, que protestaban por el funcionamiento de una planta de reciclaje de Cromo 6.

El apogeo de movilización y legitimidad social se alcanzó en el año 2004, cuando contando con el apoyo de los movimientos sociales y sindicales como FUCVAM y PIT-CNT, se logró someter a referéndum la intención gubernamental de privatizar los servicios de agua, logrando un amplio respaldo ciudadano contra esa medida y obligando al gobierno a iniciar su administración ante un resultado consumado.

Al asumir el gobierno frenteamplista, se inició la tercera etapa de la trayectoria histórica de estos movimientos, y los enemigos principales pasaron a ser las multinacionales de fabricación de pasta de celulosa, específicamente la Empresa Nacional de Celulosa España (ENCE) y la finlandesa Botnia. Las organizaciones ambientalistas uruguayas dieron el alerta a sus colegas argentinos de las



asociaciones de defensa del Río Uruguay, y con el recrudecimiento del conflicto a partir del funcionamiento de Botnia en el 2007, el eje de la acción se trasladó de Uruguay a la ciudad argentina de Gualeguaychú. Esto produjo una nueva división entre los sectores renovadores del ambientalismo uruguayo, en un ala moderada y otra radical.

La vertiente moderada, integrada básicamente por las organizaciones ambientalistas no gubernamentales más institucionalizadas, aspiró a convertirse en grupo de presión, manteniéndose autónoma de los partidos políticos. Su accionar pasó menos por la política en las calles y más por la política en las oficinas del Estado. Sus demandas específicas fueron incluidas en cuestionamientos globales sobre el modelo de desarrollo, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), o las iniciativas gubernamentales de privatización de las empresas públicas que controlan recursos naturales, como el agua. Tuvieron siempre una posición crítica hacia la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, a la que cuestionaron su utilización de los cortes de puentes y rutas como metodología de lucha. Por otra parte, creyeron que la pérdida de legitimidad de los temas ambientales, la desmovilización de la militancia frenteamplista y el cierre de su acceso a las oficinas estatales, provocaron un estancamiento tal en la evolución de las organizaciones ambientales, que casi resultó fatal para sus posibilidades de convertirse en referentes de la sociedad uruguaya. Hoy se encuentran en una situación de transición y sienten que el futuro es un gran signo de interrogación.

Por su parte, las organizaciones ambientales que conformaron la vertiente radical, son aliados de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y en conjunto se integraron en la Asamblea Ambientalista Regional que realizó tres reuniones, a saber: la primera en Nueva Palmira, donde la empresa Botnia tiene el puerto de salida de su producción, la segunda en Tacuarembó en diciembre de 2007, y la tercera en Gualeguaychú en marzo de 2008, sumándose a la misma organizaciones de Brasil y Paraguay. Las organizaciones uruguayas que son exponentes de esta vertiente ambientalista son los productores rurales de Cerro Alegre en Soriano y Mercedes, el MOVITDES de Fray Bentos, el sindicato de trabajadores de la forestación de Rivera, la Asamblea del Callejón de Montevideo, el Movimiento 10 de septiembre de 1815 de Tacuarembó (campesinos ocupantes de tierras en el departamento más forestado del Uruguay), y el Grupo Sierras de Rocha, entre otros. Estas organizaciones tratan de romper las fronteras y barreras nacionales con la apelación al acuífero guaraní como la región compartida por uruguayos, argentinos, paraguayos y brasileños.

En términos programáticos, los ambientalistas uruguayos (tanto moderados como radicales) consideraron que la instalación de las fábricas de celulosa en Uruguay provocaron un proceso de extranjerización de la tierra, sobre explotación de la mano de obra y contaminación, y a diferencia de la Asamblea de Gualeguaychú que solicitó la relocalización de las plantas de celulosa, este

movimiento pretendieron que no hubiera ninguna planta de celulosa en Uruguay, dado los efectos negativos de la forestación sobre el agua, la tierra y el contexto social.

Sin embargo, en Uruguay los argumentos de los ambientalistas contra el modelo de desarrollo forestal nunca fueron fruto de un debate nacional. La instalación de Botnia fue un hecho consumado, y con el corte desde el lado argentino, la defensa de las posiciones ambientalistas en Uruguay se ha visto deslegitimada ante la creciente ola de nacionalismo que impregna el debate sobre el tema. Las organizaciones ambientalistas han realizado tres pedidos de audiencia al Presidente Vázquez, y éste no les ha concedido ninguna, y entre los movimientos políticos y sociales analizados (partidos, vecinos, ambientalistas), en este contexto de Estados mínimos y débiles decididos a proteger las inversiones extranjeras a cualquier precio, las organizaciones ambientalistas uruguayas son los que más se han visto afectados por la crisis de la matriz estatista y partidocéntrica.

### **III.- Conclusiones**

América Latina está atravesada por un nuevo auge de las movilizaciones sociales donde actores de orientación contra hegemónica buscan expresar sus intereses, demandas y objetivos. En ese contexto, Uruguay ha sido siempre un caso de difícil de incorporar a los análisis. Es más, podríamos agregar que históricamente en Uruguay los grandes liderazgos sociales se han construido generalmente desde el Estado y los partidos políticos, es decir, desde el ejercicio del poder y no desde la oposición a él. Sin embargo, dentro de la vigencia de este esquema se observan algunas transformaciones.

En este trabajo hemos abordado la historia reciente de los movimientos sociales y populares en Uruguay en un contexto de consolidación de las tendencias de cambio estructural iniciadas hace tres décadas, esto es, el afianzamiento de la matriz agroexportadora con un crecimiento inédito de la desigualdad social, el retroceso de la capacidad estatal y una crisis de representatividad de los partidos, en especial del FA como coalición de izquierda.

Hemos visto como al iniciarse la transición democrática en 1984, todos los partidos políticos y los movimientos sociales y populares estuvieron unidos en el bloque democrático opositor a la dictadura, y como para la década siguiente con el desprendimiento de los partidos tradicionales Colorado y Blanco que pasaron a alternarse en el gobierno, el bloque democrático se transformó en un bloque progresista opositor al neoliberalismo. Finalmente con la llegada del FA al poder, este bloque progresista a su vez comenzó a transitar una nueva fase, con la escisión entre oficialistas y opositores al gobierno frenteamplista.

En este contexto de crisis estatal y partidaria, especialmente de la izquierda, nuestra hipótesis guía es que dicha crisis tuvo efectos complejos y diferenciales sobre los movimientos sociales y sus capacidades de acción, en tanto planteó a éstos una serie de oportunidades de desarrollo a la vez que surgieron elementos que condicionan fuertemente el mismo. Por el lado de los efectos positivos el proceso de crítica y escisión de su propia coalición de las fuerzas opositoras más radicales, constituyó en conjunto un proceso que explica la revitalización de los movimientos sociales en los últimos años. Por el lado negativo, la crisis del modelo estatal desarrollista, así como la adopción de estrategias continuistas de las soluciones pro mercado por parte del gobierno frenteamplista, condicionó esta evolución pues los marginó de los escenarios de elaboración de las políticas públicas.

Históricamente, la mayoría de los movimientos sociales trataron de relacionarse con el sistema político y el Estado para plantear sus demandas, evitando convertirse en actores disruptivos del ordenamiento político, y apelando al uso del mecanismo de los plebiscitos y referéndum para canalizar el descontento social. Hoy esos instrumentos constitucionales tienen pocas posibilidades de utilizarse, porque el FA como fuerza oficialista no las apoya, y por que en la medida que la tradición de lucha en común dentro del bloque democrático primero y progresista sobrevive y mantiene su peso, la lógica de la confrontación interna está subordinada a la lucha frente al bloque conservador, siendo por ahora escasas las posibilidades para una fuga hacia la izquierda (con éxito) de grupos políticos y movimientos sociales opositores al gobierno frenteamplista.